
La universidad: una crisis de larga duración

Enrique Bernalles

MUCHAS cosas anómalas suceden en nuestras Universidades; mencionemos por ejemplo, que el año calendario ha dejado de tener significado y vigencia para ellas. Resulta así difícil hacer un balance de lo que el año 1975 ha representado para la vida misma de la Universidad, cuenta habida de que muchas de ellas y avanzado el mes de marzo de 1976 no han acabado aún el año académico anterior y que en términos organizativos y presupuestales han perdido la cuenta de cómo y con que funcionan.

Esta constatación nos lleva, sin embargo, a reflexionar sobre el deterioro de la institución universitaria y a inquirir sobre las causas posibles de lo que desde una perspectiva global podríamos calificar de pérdida de vigencia y comportamiento ahistórico de la Universidad en el Perú. En términos más simples, se trata de analizar la evolución de la crisis universitaria en 1975; sólo que el término crisis, por repetido y habitualmente mal empleado nos resulta insuficiente e inadecuado para una correcta formulación de la problemática universitaria.

A partir de una concepción universitaria que ubica a ésta al interior de la sociedad e interactuando con ella mediante el uso de los recursos, objetivos y fines que le han sido históricamente asignados o que la propia Universidad ha reivindicado para sí, pretendemos una caracterización del comportamiento universitario que incida sobre los siguientes aspectos: Universidad, Sociedad y Estado, los niveles de la producción universitaria, el CONUP, la ausencia de legislación universitaria y el comportamiento de los actores universitarios.

1. UNIVERSIDAD, SOCIEDAD Y ESTADO

El título es ambicioso y supone más de lo que podemos analizar dentro de los alcances del presente artículo. Consideramos sin embargo, que el estudio de la Universidad es insuficiente desde la clásica perspectiva autonomista y donde ella, a partir de un voluntarismo clarividente se margina de lo social para ir hacia lo social desde posiciones abstractas e intelectuales no exentas de paternalismo y de aristocratismo condescendiente. La Universidad es una institución de la sociedad; vive y expresa en ella los problemas estructurales y las características de la sociedad nacional que la contiene. De allí que los objetivos académicos y profesionales, su organización, la composición social, las vivencias políticas, la programación de la actividad científica, la extensión cultural, etc., no sean distintas de las posiciones e intereses de grupos y de la estructura de poder que se manifiesta a nivel de toda la sociedad en su conjunto.

Si bien es cierto que la Universidad no forma parte del aparato productivo en sí misma, tiene desde la superestructura educativa e ideológica un rol de gran importancia en cuanto alimentador directo de los recursos humanos calificados y de la tecnología que el proceso productivo requiere; ello explica el interés de los grupos económicamente poderosos por copar la Universidad con una población selectiva y una orientación programática afín con su control económico y social. Explica también el interés del Estado, en las sociedades estatistas, por ligar de manera indisoluble la Universidad, con el proyecto político que el Estado desarrolla. Las Universidades norteamericanas y la Universidad soviética, son una buena muestra de los términos propuestos.

En sociedades como la nuestra, donde el conflicto social tiene agudo índice de expresión y donde simultáneamente se dan fenómenos sociales como la extinción del poder oligárquico, el fortalecimiento de una burguesía conformada por sectores medios profesionales y altos de tipo empresarial y la emergencia del campesinado y el proletariado urbano, la lucha de clases y la confrontación de intereses que se manifiestan en todo orden de cosas, pasa a ser el elemento que define y caracteriza el comportamiento de la sociedad. Al interior entonces de esta etapa histórica que vive nuestro pueblo y donde se tiene cada día mayor certeza de que se-

rán finalmente los sectores populares los que legítimamente asuman el control y la dirección del proceso productivo y político, se debate y se desdibuja la Universidad.

Decimos se debate, porque ella vive con intensidad y pasión propios de su pretendida eterna juventud, los problemas del conflicto social. Ello se refleja en la revisión y cuestionamiento de sus fines y objetivos; en la apertura y práctica de nuevos conocimientos y ciencias que rivalizan con los que corresponden a una tradición y un abolengo cultural; en su pretensión de asumir el análisis político de los problemas sociales en oposición con quienes perseveran en las tesis del apoliticismo universitario, en la proliferación de Universidades que se estratifican diferencialmente según su capacidad de apertura a determinados sectores sociales y los recursos a su disposición; en fin, por la propia composición social de la Universidad, que lentamente va dejando de ser el sector privado de las "familias bien", para amplificarse en términos que combinan la movilidad social con el acceso del proletariado urbano y en ínfima proporción, del campesinado a la universidad.

Pero decimos también que se desdibuja la universidad, porque si bien ella no es, ni puede ser en esta hora, la Universidad exclusivista y profesionalizante que sirvió a la sociedad oligárquica, ha quedado aún semiparalizada por la fuerza de esa tradición, por la resistencia de la arrogante burguesía a aceptar el proyecto de una universidad popular y por el desconcierto al mismo tiempo de la propia universidad para encontrar el camino de un sistema que ligue su actividad cultural y científica con los intereses populares.

Nada de lo enunciado es en verdad nuevo, la incapacidad de la universidad para responder a las demandas de cambio social, se insinúan durante la década del sesenta, cuando frente a la emergencia de los sectores populares, la masificación de los servicios educativos y la presión de los programas desarrollistas, la universidad apenas si pudo responder con una multiplicación improvisada de universidades calcadas del modelo tradicional y el fortalecimiento de dos o tres universidades modernas, pero cerradas a la democratización interna y a la ampliación de

su composición social. Sin embargo, esta crisis se acentuó a partir de la instauración del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. En efecto, ante un proyecto político, difícil de definir por su carácter procesal y por un conjunto de sucesivas rectificaciones, pero donde lo que sí adquiría nitidez y poder efectivo era la nueva personalidad del Estado, la universidad perdió su personalidad de interlocutor, lucidez para precisar y gestionar un rol que garantizase la capacidad crítica y el prestigio social de la institución; por último la posibilidad misma de disponer de recursos humanos y de instrumentos adecuados para el análisis y comprensión de un proceso, que se acostumbró entonces, a prescindir de la Universidad.

Desde esta perspectiva, la redefinición de las relaciones Estado-Universidad, se produjeron desde el punto de vista de los intereses y el proyecto político encarnado en la voluntad del Estado; campos de la actividad universitaria, como la capacitación de cuadros superiores y la investigación, fueron asumidos directamente por dependencias estatales, la legislación universitaria fue impuesta sin consultar la opinión de los propios interesados, calificados profesores fueron sustraídos de la Universidad e incorporados a la Administración Pública, las grandes políticas de cambio se elaboraron sin acudir a la opinión universitaria y sin demandar de ella los informes y las investigaciones previas más adecuadas. Vale decir que la universidad fue prescindida y no significó nada, absolutamente nada, para la dinámica del proceso y para el rol cada vez más importante del Estado en la orientación y participación en la actividad económica, en la fijación de reglas políticas de juego y en la organización de los sectores sociales.

Minimizada en su importancia, sin aporte propio para el proceso, reducida a una autonomía carente de significación y encerrada en una dialéctica intrascendente y de microclima, la Universidad contribuyó ciertamente a que el Estado fijase esas reglas de juego. Fue así, porque la Universidad no supo o no quiso asumir con realismo que algo nuevo y diferente estaba sucediendo en el país; se sumió en un silencio inexplicable, permitió que se negase colaboración a proyectos que sí tenían alcance y significación nacional; se dedicó a la gestión menuda de obtener más rentas y perdió autoridad, al no controlar la violencia y la intolerancia

de los grupos políticos que trasladaron a ella la lucha por una vigencia que habían perdido a nivel de país. Este cuadro subsistente durante el año 1975 y diríamos que hasta agravado, por la persistencia en conductas equivocadas y por la incapacidad universitaria para señalar cuando menos una caracterización de lo que se ha dado en llamar "primera y segunda fase de la revolución", señalan claramente el deterioro y la pauperización de la universidad; su pérdida de lugar en el conjunto de sus relaciones con la sociedad y con el Estado.

2. LOS NIVELES DE LA PRODUCCION UNIVERSITARIA

Si bien es cierto que una universidad puede desubicarse en el conjunto de sus relaciones con la sociedad y el Estado, ello no necesariamente incide sobre la calidad y la abundancia de su producción intelectual y científica. En medio del más profundo anacronismo social, la Universidad puede conservar niveles de excelencia si logra mantener calidad en su planta docente, capacidad para la reflexión aunque ésta sea abstracta y no aplicada a las necesidades de su contexto histórico; si a pesar de su enclaustramiento la investigación humanística y científica mantienen vivo el espíritu del conocimiento y el de la creatividad. En síntesis, lo que afirmamos es que la institución universitaria temporalmente puede quedar relegada respecto de sus obligaciones sociales y de su capacidad crítica, pero que ella no muere ni desaparece si al menos logra conservar las funciones vitales que la definan y le den especificidad como órgano dedicado a la conservación y acrecentamiento de la ciencia y la cultura.

Es pues en estos aspectos que dicen relación con la producción universitaria, donde queremos detenernos ahora, para inquirir sobre los niveles del rendimiento académico, sobre la calidad de la planta docente, sobre el número y tipo de investigaciones realizadas, sobre la efectiva preparación y dedicación del estudiantado, sobre los libros publicados y la renovación de bibliotecas y laboratorios, sobre los convenios de intercambio y extensión cultural y los programas de proyección social.

¿Cuál es el balance de lo hecho por la Universidad en 1975? Si mediara una estadística al día de lo que cada universidad ha producido y si el CONUP tuviera una información centralizada y al día sobre estos aspectos, nuestro análisis se simplificaría por el simple cotejo objetivo de los números y los porcentajes. Sensiblemente, no es así, y en ausencia de este tipo de datos no nos queda otro recurso que acudir a la apreciación directa, a la información proporcionada por los propios actores universitarios y a lo que la publicidad de los conflictos universitarios deja traslucir respecto del trabajo y la seriedad académica de las Universidades.

Desde esta óptica, constatamos que la producción universitaria en el Perú, es descendente y que durante el año 75 el nivel de su trabajo académico ha sido alarmantemente pobre. De treinta y tres universidades que tiene el país y 15,000 profesores que trabajan en ellas, apenas si tres o cuatro son capaces de presentar niveles aceptables de planta docente realmente dedicada a sus funciones y con posibilidades de cumplirlas, programas curriculares coherentes y efectivamente desarrollados, investigaciones acabadas y publicaciones. Lo que ha primado, por el contrario, ha sido la mediocridad, el caos, la pauperización, la más absoluta incapacidad para alcanzar los más elementales niveles de seriedad académicos, demandables para instituciones de educación superior.

Esta afirmación no es peyorativa, ni pretende ofender a nadie; es más bien la constatación dolorosa de quien trabaja en la Universidad y dedicado a la investigación de ella, observa que ésta se debate en la más profunda de sus crisis y en la más absoluta pobreza intelectual y científica. Que los programas y planes de estudio en su gran mayoría no se han cumplido, es una verdad irrefutable; que una alta proporción de profesores no son diplomados y no cumplen con sus tareas docentes porque comparten esta actividad con otras que le dan mayor remuneración, es también innegable; que en muchas Universidades el estudiante rechaza niveles de exigencias y que racionaliza tras alambicadas posiciones políticas, el expediente de una aprobación mecánica y simplona de cursos y créditos, está a la vista de todos quienes conocen de cerca el funcionamiento de las universidades; que el número de investigaciones es

mínimo y que además no hay interés por propiciar y financiar esta importante actividad es también otro elemento de una triste realidad. El inventario no acaba ahí: bibliotecas que no se renuevan, ni amplían, laboratorios obsoletos o semiparalizados por falta de mantenimiento, locales sucios y abandonados, crisis de autoridad, uso constante de la violencia, falsificación de notas, certificados, grados y diplomas, corrupción administrativa, forman parte también de una crisis que ha trascendido a la Universidad para hacer escarnio de ella en más de una denuncia periodística o de intervenciones judiciales.

En su conjunto, pues y a pesar, insisto, de la eficiencia y respetabilidad de muy pocas universidades, tenemos que decir que no son estas universidades preservadas y tal vez marginales a la problemática universitaria nacional, lo que define el comportamiento de éstas. Es más bien el deterioro y la pobreza del trabajo productivo del mayor número de universidades lo que define nuestra realidad universitaria. Frente a ello, lo más triste de constatar es que mientras ella se hunde, sin encontrar por sí sola recursos que la saquen de su postración, el gobierno, ha permanecido, en los hechos insensible e indiferente a un problema que tiene ya características de drama nacional.

3. EL CONUP

Detengámonos ahora sobre un órgano que frente a la crisis tiene una grave responsabilidad y culpabilidad: el CONUP. Creado por el D.L. 17437, el CONUP tiene como finalidad el gobierno, la organización y la planificación del sistema de la Universidad peruana. Dos supuestos fundamentaban la existencia de este organismo; el primero, que la Universidad en el Perú era una en cuanto modelo, organización y orientación; esta universidad, segundo supuesto, distribuido como unidades universitarias en distintos puntos del país, requería de un centro coordinador que impartiese las directivas correspondientes a la alimentación del modelo, según tamaño y alcance de cada unidad. Vale decir, que la autonomía de cada Universidad se trasladó al CONUP encargado consecuentemente de la administración del sistema.

Si consideramos que el desarrollo de la educación superior requiere efectivamente de una racionalización de los recursos que emplea y de los niveles de capacitación que el país demanda, la idea de sistema y de un órgano encargado de la coordinación y la planificación, resulta lógica y consistente y desde ese punto de vista tenemos que aceptar que el CONUP representaba un avance positivo y necesario. En los hechos, fallaron los supuestos del sistema y del CONUP; lo primero, porque el sistema no se constituyó nunca sobre un modelo de Universidad única, sino que aglutinó universidades que conservaron su propia especificidad, pero sometiéndolas a la camisa de fuerza de una organización única; lo segundo, porque el CONUP no organizó los escalones de coordinación regional, ni la Asamblea de Rectores, sino que se estructuró a base de un Consejo de Rectores que centralizó todo el poder y prescindió de la coordinación para actuar directamente como gobierno fiscalizador e interventor.

Estos vicios, perceptibles desde la fundación del CONUP en 1969, se hicieron más visibles en 1972 cuando derogada la ley 17437 y promulgada la ley 19326, pero sin aprobarse el Estatuto Universitario, el CONUP subsistió a base de disposiciones transitorias que le dieron más poder y que sometieron al conjunto de las universidades a la voluntad de un poder central no sujeto a ningún control, ni limitado por ninguna ley reguladora del sistema y del propio CONUP.

A tres años de producida esa situación y sin ninguna medida correctiva, los desaciertos del CONUP, el uso prepotente de su autoridad, el poder omnímodo de la dirección Ejecutiva hasta límites intolerables, las inocultables deficiencias administrativas, el uso del presupuesto como un instrumento de odiosas discriminaciones, etc., convierten al CONUP en uno de los grandes responsables del caos universitario, de la pérdida de autoridad y de la incapacidad para resolver los problemas que ahora y con mayor periodicidad se multiplican en cada universidad.

La suma de estos desaciertos y el propio malestar creado en el Consejo de Rectores, determinó que a mediados de 1975 se nombrará una Comisión Evaluadora del CONUP. Por haber formado parte de una de las sub-comisiones, el

autor conoce los resultados de la evaluación, la misma que arrojó un balance negativo para el funcionamiento del CONUP en los aspectos correspondientes a su organización, presupuesto, evaluación académica, planificación y gobierno ejecutivo. Surgió, pues, como consecuencia inevitable, la reorganización del CONUP; medida que se puso en práctica hacia fines del año 75.

Somos escépticos sin embargo, de los resultados que la reorganización pueda arrojar. En la práctica, el desgobierno y la suma de desaciertos atribuibles al CONUP son de tal magnitud que no es la reorganización sino su desaparición y sustitución por otro organismo coordinador y regulador, lo que puede devolver algo de la calma y seguridad de gestión que se ha perdido en las universidades.

Balance negativo y respecto del cual no es necesario hacer un detalle pormenorizado, dado el conocimiento público del desprestigio de CONUP; acaso y sólo para refrescar la memoria, pidamos cuentas a este organismo de lo que ha hecho para resolver los problemas de la Universidad de San Agustín de Arequipa o de la Federico Villarreal de Lima y preguntémosles además si sus presuntas soluciones no han contribuido a agravar más las tensiones y la violencia que ahora reina en esas universidades. Este análisis no puede pues ignorar ni minimizar esos hechos y señalar en consecuencia que es el CONUP uno de los factores que ha contribuido a agravar la crisis universitaria.

4. LA AUSENCIA DE LEGISLACION UNIVERSITARIA

En la lista de agravios que la Universidad puede presentar, sin que esto signifique omitir las irresponsabilidades en que la propia Universidad ha incurrido, es este uno de los temas sensibles e irritantes.

Año tras año, la Universidad vive una tensa, desesperante y deteriorante espera. Los hechos son bien conocidos: desde 1972 la Universidad no tiene ley ni estatuto que la organice y reglamente. ¿Cómo se ha llegado a tan absurda situación; por qué el gobierno demora la promulgación de disposiciones normativas; hasta cuándo y cuánto puede permitir el país y un proceso de reformas sociales

que la Universidad haya sido abandonada a su propia suerte; es posible esperar que con autoridades cuyo mandato ha sido prorrogado sine die se pueda gobernar y lograr consenso sobre las más elementales medidas de programación académica?

Se ha dicho en reiteradas oportunidades que para una problemática tan compleja, no es la normatividad lo que resolverá la crisis universitaria y que la Universidad requiere recuperar capacidad de iniciativa y autoimpulso renovador. Ambos planteamientos nos parecen correctos y no vamos a insistir sobre ellos. Ello no exime sin embargo de un marco legal que sienta las bases de la organización universitaria, la inserción de ella y su contribución al proceso social de cambios, las modalidades, combinaciones y tipos de universidades afines con la reforma educativa, con el desarrollo regional y con la participación plena, como elementos coadyuvantes del socialismo que persigue el modelo peruano.

Modificación de la ley 19326 o promulgación del Estatuto, lo concreto es que la Universidad requiere también de soluciones legislativas. Ellas deben darse a partir de la opinión y la consulta con los estamentos universitarios, sobre bases de diálogo que evidentemente tampoco pueden ser la imposición unilateral de un criterio universitario aislado totalmente de la realidad social y de la correlación de fuerzas con el interlocutor gobernante. En ausencia de estos criterios legislativos y en aumento la crisis y el desgobierno, la Universidad tiene en verdad muy pocas posibilidades y recursos propios para salir por sí misma de la postración en que se encuentra.

Soluciones peligrosas, como el proyecto de sectorización universitaria que elaborara la Universidad Agraria, son a nuestro juicio una buena muestra del peligro de desintegración que se vive y de la forma como cada Universidad, puede llegar a idear soluciones que apenas si tienen aplicación para su realidad concreta, pero que al formularlos con pretensiones generales resultan más peligrosas y desvirtuantes que la propia organización actual, por su tendencia a la atomización, a la pérdida de la autonomía universitaria y al corporativismo bajo la dirección monolítica del Estado.

La espera del Estatuto Universitario ha sido en verdad desesperante; múltiples veces se ha anunciado su promulgación como algo inminente y otras tantas veces ha quedado ello en rumor o en silencio inexplicable a pesar de que los propios ministros adelantaban la noticia. La búsqueda de una coyuntura favorable o signos visibles de que la población universitaria acepte sin mayor cuestionamiento la solución ideada, han sido al parecer las razones de este retardo. La calma y la paz social que el gobierno requiere serían pues la causa de que la Universidad siga a la deriva, sin ley y sin estatuto. Peligrosa estrategia ésta, que sacrifica la Universidad a una paz social que no es tampoco tal, cuando en más de un lugar hay violencia universitaria desenfrenada, muertos y heridos, huelgas y capturas de locales y en casos extremos, la posibilidad de que los grupos universitarios más politizados unan su descontento al de las organizaciones sindicales y campesinas para orquestar conflictos sociales de mayor envergadura.

Desde esta perspectiva, sostenemos que el gobierno no puede soportar por más tiempo la tesis de que la violencia y el caos universitario son fruto de un microclima que no trasciende ni altera la paz social. En alguna medida es la formación de cuadros, el potencial de recursos humanos y tecnológicos que el país necesita, lo que se está perjudicando. Ello es más que suficiente para cortar una tensa y frustrante espera. La Universidad demanda legislación y ella debe venir y pronto.

5. EL COMPORTAMIENTO DE LOS ACTORES UNIVERSITARIOS

Tocamos con este punto el último tema de nuestro balance. Por su complejidad y extensión apenas si los enunciamos. El comportamiento alude a la organización, posiciones y actitudes que los actores universitarios asumen frente a la situación universitaria y la forma como ésta se ha desenvuelto durante el último año. A su vez el concepto de actores universitarios involucra a los estamentos constituyentes de la Comunidad: profesores, estudiantes y trabajadores no docentes.

En lo que se refiere al nivel organizacional, se nos presenta una variante fundamental: el fortalecimiento del sector de

trabajadores no docentes, que tanto como organizaciones sindicales locales, como a nivel nacional por medio de la FENTUP, se ha convertido en el catalizador y conductor de los movimientos universitarios, pues si bien su punto de partida ha sido la reivindicación salarial o de condiciones de trabajo, ello ha servido para posiciones de lucha y denuncias que han puesto el dedo en la llaga sobre el comportamiento antidemocrático de las universidades, los abusos de autoridad, las prepotencias del CONUP y algunas notorias contradicciones del Gobierno militar en materia laboral. Por su capacidad movilizadora y el radicalismo de sus posiciones, ha sido el movimiento de trabajadores no docentes el que se ha puesto a la vanguardia de los movimientos universitarios y lograr el reconocimiento de actor estamentario; calificativo que no nos hubiéramos atrevido a emplear hace muy pocos años. (En la década del sesenta se definía la Universidad como una comunidad de maestros, alumnos y graduados).

En ausencia de programas netamente universitarios y carentes de posiciones propias para participar significativamente en la política nacional, las organizaciones estudiantiles han tenido en muchas universidades, la vida que le ha prestado el Sindicato de trabajadores, alistándose así tras sus banderas para incluir reivindicaciones pequeñas e insustanciales demandas universitarias. Constatación de gran importancia y cuyo relieve estriba en la capacidad de organización y estructuración de intereses clasistas, la Universidad sabe ahora y por una vía que no es la tradicionalmente declaratoria, que el trabajador no docente es parte fundamental de la Comunidad Universitaria y que tiene un quehacer participante de la misma tarea y misión de la Universidad.

Por lo que toca al movimiento estudiantil, a nivel formal subsisten las federaciones locales y la Federación de Estudiantes del Perú, pero tanto los organismos de base como la entidad representativa nacional, han perdido la representación, la fuerza y la capacidad de gestión que ostentaban durante la década del sesenta. ¿Quién o quiénes conducen entonces el movimiento estudiantil; qué explica el desfazamiento de las federaciones universitarias? Varios factores deben ser mencionados: a nivel interno, un proceso de aguda politización y lucha entre facciones de confesión mar-

xista-leninista en general, ocupa la atención preponderante de los grupos que participan más activamente del gremialismo universitario. El control político que las organizaciones que logran capturar la Federación tienen sobre ésta es determinante de la pérdida de importancia de esos organismos, que al convertirse en cajas de resonancia de la entidad política de base, no hacen más que magnificar los mismos planteamientos, pero sin ninguna posibilidad de recoger otras demandas estudiantiles, ni de formular un programa de acción que atienda en primera instancia los problemas internos de la Universidad. Esta aguda politización, está lamentablemente cargada de irracionalidad, de intolerancia, de sectarismo y de una violencia que inclusive no otorga garantías para las más elementales funciones de la vida universitaria. Este ultrismo, responsable de la atomización de los movimientos universitarios y de la incapacidad de las federaciones universitarias para generar otras actitudes que no sean las que corresponden, al deplorable infantilismo de izquierda, se ha enquistado en la Universidad, pero no tiene una posición, ni le interesa en sí misma la problemática universitaria. La Universidad que ellos han contribuido a desprestigiar, es su cueva y su refugio, porque a nivel externo no han hecho otra cosa que reproducir su estéril comportamiento y aislarse de las necesidades populares, rechazar por dogmáticos, soluciones coyunturales y convertirse en grupúsculos igualmente indeseables para las organizaciones populares más avanzadas políticamente.

Todo esto sucede mientras la indiferencia, el seguidismo y la desmovilización de la gran mayoría estudiantil asume las características de un desinterés alarmante en la medida que es el indicador de un comportamiento errático y que despoja al universitario de aspectos sustanciales de su preparación para responsabilidades sociales de mayor envergadura. El análisis de los movimientos universitarios en su relación con el proceso político y el Gobierno Revolucionario puede arrojar algunas luces sobre este comportamiento.

Durante la década del sesenta la FEP y federaciones locales alcanzaron una importancia que tal vez fue más aparente que real. Las universidades eran instituciones que en número y composición del estudiantado correspondían con los intereses y estructura del poder dominante; desde esa

perspectiva las dirigencias estudiantiles podían considerarse legítimos interlocutores del Gobierno, dialogar con los Ministros, alternar con los parlamentarios, conseguir logros que no molestaban mayormente a los gobernantes y proclamar sus triunfos ante la prensa escrita y la televisión. Todas estas actitudes estaban por cierto cargadas de sinceridad y de posiciones radicales que abrieron el camino de la politización, pero la característica esencial es que se luchaba al interior del sistema y que las opciones de cambio se vislumbraban a través de soluciones electorales o por el camino de luchas populares previstas para un largo plazo y donde la Universidad asumía un rol de forja concientizadora.

La irrupción de las Fuerzas Armadas en el poder, su voluntad de cambio y la audacia sorprendente para llevar a cabo acciones de gobierno largamente esperadas, constituyeron una modificación sustancial de las reglas de juego políticas. La derecha y los partidos políticos tradicionales iniciaron el arduo proceso de negociar y acomodarse al nuevo estilo de poder; en el camino, perdieron importancia los sectores de la derecha oligárquica, mientras se fortalecía una burguesía empresarial que logró impactar y aprovechar las contradicciones al interior del gobierno. Los partidos políticos no tuvieron la misma suerte y quedaron librados a su capacidad de subsistencia y de experiencia política. De allí, por ejemplo, la presencia de una APRA rechazada, que agoniza, pero que no muere y la extinción en la práctica de otros partidos que no realizan ninguna actividad política.

Por la naturaleza de nuestro análisis, no es del caso extendernos en el estudio del Gobierno de la Fuerza Armada y las modificaciones de comportamiento político que su presencia y acciones introdujera. Lo que sí nos interesa resaltar, es el efecto desconcertante que el nuevo estilo introdujo en el movimiento universitario que objetivamente perdió la importancia que había tenido hasta esos momentos. Lo primero, porque la Universidad misma dejó de ser un centro al cual convergieran las principales acciones políticas del gobierno militar y la captación de adeptos. Lo segundo, porque en el transcurso de la década del sesenta la Universidad se había multiplicado en número de instituciones y de alumnado, pero simultáneamente no había

avanzado en empleo de recursos calificados y en infraestructura para la investigación y el análisis científico; es decir, se sometió a un fenómeno de masificación con pauperización, acumulando los excedentes de un pésimo sistema educativo y de un deficitario mercado de trabajo.

Los factores enunciados y el voluntarismo impositivo del Gobierno, creando efectos desmovilizadores, fueron a nuestro juicio, elementos que generaron la irritación y la exasperación de las dirigencias estudiantiles y de los grupos universitarios acostumbrados a roles relativamente importantes en la política nacional. Nació de allí un rechazo global al gobierno de la Fuerza Armada y a las políticas de éste; se buscó la simple caracterización a partir de posiciones ideológicas a priori y se renunció al análisis conceptual comprensivo y extensivo. Es así como en los últimos años, la ultraizquierda se hizo fuerte en la Universidad y se concretó al diálogo natural con sus iguales del exterior que habían logrado el control de algunos sindicatos y federaciones. La predominancia de algunas tendencias marxistas (Patria Roja, Bandera Roja, Sendero Luminoso), desplazó inclusive a otros grupos de izquierda marxista cuya posición era más racional y de respeto por el trabajo universitario. Sobre treinta y tres universidades, muy pocas son las que escapan a esta situación; ello ha derivado en paralizaciones inútiles, en intervenciones del CONUP y en recesos universitarios que tampoco han aportado solución. En el centro mismo de la crisis, es el movimiento universitario y su larga tradición de lucha, su claridad de análisis y la conciencia realista de las modalidades de inserción con los movimientos populares, lo que ha sufrido mayor daño y deterioro. He ahí pues uno de los problemas claves de la actual problemática universitaria y uno de los factores que requiere más delicado tratamiento. Una cosa es cierta, ninguna solución o remedio presunto para nuestra Universidad será tal, si no canaliza la efervescencia estudiantil y no propone medios para organizar la participación y el ejercicio político de las grandes mayorías estudiantiles.

Junto a los trabajadores no docentes y al movimiento estudiantil debemos mencionar al profesorado. Por su rol y función universitaria se supone una presencia activa y un mínimo de organización para este sector. No es así; salvo

grupos aislados que han formado asociaciones en algunas universidades, el profesorado no tiene vigencia, ni significación más allá del aula. En la mayoría de los casos no tiene ninguna participación en la toma de decisiones, ni ha sido capaz de asumir una posición para resistir las agresiones externas e internas que sufre la Universidad, rescatar para su misión el pensar la problemática universitaria y ofrecer soluciones alternativas. Se dice que esto obedece a que ser profesor universitario ha dejado de ser una misión para convertirse en otro modo de ganarse la vida; lo uno y lo otro no se oponen, pero optar la Universidad sólo en función de lo segundo es sí un serio problema que explicaría la mediocridad y la indiferencia de muchos profesores. Para quienes en contrario tienen una auténtica vocación universitaria, la humillación y la frustración de vivir una Universidad que se destruye delante de ellos, resulta una visión y una vivencia difícilmente soportable.

¿Qué hacer? Hemos tratado de presentar un balance realista y distante de exageraciones apocalípticas. Esperamos no habernos alejado del propósito. Empeñados tercamente en la construcción de una Universidad que responda con seriedad a sus obligaciones científicas y académicas y que paralelamente pueda comprometerse con la problemática de los sectores populares y con la instalación de un socialismo de justicia social en nuestro país, creemos que ha llegado el momento de pasar a la acción. La acción consiste en demandar al Gobierno Militar el trato adecuado y la participación efectiva y libre de la Universidad en el proceso de cambios, pero significa también el esfuerzo mancomunado de la comunidad universitaria, de trabajar con seriedad por la recuperación de nuestra capacidad de iniciativa y de nuestro prestigio institucional. Es un reto y una opción que debe responderse hoy; no hay peor solución que aquella que llega tarde.